

La nueva proyección internacional de Venezuela

LEOPOLDO GONZÁLEZ AGUAYO

Introducción

El presente trabajo no pretende dar una visión panorámica del conjunto de las relaciones venezolanas ya que el objetivo original es bastante modesto: obtener una interpretación un poco más amplia del viaje del presidente Rafael Caldera por seis países de América del Sur y su entrevista, pocos días después, con el presidente del Brasil.

La investigación ha dado como resultado que el propósito original quede inmerso en problemas de mayor perspectiva, de los cuales los resultados del viaje no son más que muestras de una paciente estrategia a más largo plazo.

PRIMERA PARTE

1. Primera explicación del viaje de Rafael Caldera

Como es de todo mundo conocido, entre el 6 y el 14 de febrero pasado, el presidente Rafael Caldera de Venezuela realizó una gira por seis países latinoamericanos y se entrevistó con su colega y vecino el general Emilio Garrastazu Méndez el 20 del mismo mes en la frontera entre ambos países.

El viaje del presidente Caldera respondió a diversas motivaciones internas y externas, aprovechando un momento sumamente favorable para las proyecciones que los actuales dirigentes de la Patria del Libertador quieren imprimirle al país dentro de las iniciativas latinoamericanas, para consolidar su nueva imagen internacional.

Como lo han señalado diversos comentaristas y fuentes de información, los problemas internos que vive el mayor productor y exportador de hidrocarburos del subcontinente están en vías de solución en lo que respecta a las más graves secuelas del subdesarrollo social. Para ello se siguen programas acelerados de levantamiento de la infraestructura, cuyo financiamiento es posible merced a los importantes excedentes de divisas que se obtienen de la exportación de combustibles (que proporcionan el 60% de los recursos totales del Estado). Se deduce que la vieja aspiración venezolana de "sembrar el petróleo" se

encuentra en vías de convertirse en realidad. De todas formas aún con el alto índice de inversión que puede realizar el país el problema de equipamiento industrial se revela agudo, dado lo reducido del mercado nacional, alrededor de 11 millones de habitantes, de los cuales inclusive si se considera un porcentaje creciente de población gozando de mayores niveles de vida y consumo, no son los suficientes para decidir la instalación de empresas rentables. Otra grave limitación que encuentran las empresas es su imposibilidad de superar la estructura deformada de los costos, derivada de la inflación que ha llegado a convertir a los principales núcleos urbanos del país en unos de los más caros del mundo en términos reales.

En ocasiones estos problemas se han reflejado en la actitud internacional del país. Si bien los dirigentes —los actuales y los de los dos regímenes anteriores— se inclinaban por una activa participación del país en los ensayos de integración, los dirigentes de las instituciones privadas, particularmente los de la poderosa FEDECÁMARAS (Federación de Cámaras de Comercio) lograron que el país se abstuviera de la firma del Tratado de Cartagena que dio nacimiento al Pacto Andino en mayo de 1969.

El inicio del régimen de Rafael Caldera, en junio de 1969, hasta entonces principal dirigente e ideólogo del partido COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente) comenzó con un sesgo pronunciado, abandonando ciertas prácticas instauradas por sus dos predecesores, tales como la aplicación de la Doctrina Betancourt, que implicaba el rompimiento de relaciones diplomáticas con países cuyos regímenes gubernamentales hubiesen surgido de golpes de Estado militares.

Doctrina cuyo mantenimiento invariable había obligado a Venezuela a un cierto aislamiento al aplicarse y mantenerse hasta la llegada al gobierno del régimen socialdemócrata en los casos de Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Panamá, Honduras y El Salvador, además del rompimiento de relaciones con Cuba desde 1963. Obviamente con visión pragmática y realista los nuevos dirigentes aspiraban a librarse de las ataduras y rigideces que imponían tales doctrinas.

Para redondear la lista de factores internos que han influido directamente en las nuevas actitudes venezolanas externas, debe considerarse la campaña para las elecciones presidenciales, a las que eventualmente podrán concurrir 4.5 millones de electores el 5 de diciembre próximo, comicios en los que COPEI piensa triunfar nuevamente sobre sus difíciles contendientes de Acción Democrática sin poder presentar legalmente como candidato al actual presidente. De aquí se deduce el interés del partido por dotar a su nuevo candidato de un halo de prestigio externo capaz de superar las relativas ventajas internas de sus adversarios.

Existen también diversos factores en el plano externo que impulsaron a los nuevos dirigentes de la Patria del Libertador a pronunciarse por una política dinámica que obligaba a dejar la política de relativo "aislamiento" o cierto desentendimiento de problemas que afectaban, aparentemente, en mayor medida a los otros países latinoamericanos, mientras Venezuela vivía los supues-

tamente felices años de la prosperidad petrolera. Entre los factores ahora mencionados cabe destacar el interés de los dirigentes venezolanos por abrir caminos que proyectasen al país en el concierto internacional, particularmente en el latinoamericano, apoyando la posición e intereses de los países medianos del subcontinente. Aspiración que tiende a aumentar el peso de los países de "menor desarrollo relativo" en la lucha por el desequilibrio de fuerzas que se libra actualmente dentro de la América Latina, a fin de obtener una reestructuración del viejo orden más acorde con los intereses de los países menores, disminuyendo y neutralizando los aspectos negativos de la influencia de los tres "grandes". Venezuela está también consciente de que necesita puntos de apoyo en los citados países "grandes" por lo que desarrolla contactos especiales con Argentina y México, bajo el argumento de una solidaridad subregional más realista y alejada de los aspectos folklóricos con que tan frecuentemente se han revestido tales iniciativas en el subcontinente.

Deseosos de que dicha solidaridad fructifique en intereses concretos, en especial en la defensa de los artículos primarios base de las exportaciones del subcontinente, los dirigentes de la Patria de Bolívar se propusieron convencer de su buena voluntad a sus interlocutores (similarmente a como lo hicieron los dirigentes chilenos hace dos años), esgrimiendo la tesis de sostener relaciones con todos los países fundándose en el principio chileno de "convivencia dentro del pluralismo ideológico", o como la intitulan los venezolanos: convivencia dentro de la "pluralidad ideológica sin fronteras", "solidaridad pluralista" o "unidad dentro de la diversidad". Obviamente los venezolanos han estado entre los primeramente opuestos a las manifestaciones hegemónicas dentro del subcontinente (recuérdese la airada protesta del presidente Caldera y del embajador venezolano ante la OEA, el 10 de diciembre de 1971, en respuesta a la insinuación del presidente Nixon de aprobar el papel del Brasil como potencia dominante en el subcontinente).

Dentro de la efervescencia que convulsiona a la América Latina no deben olvidarse los crecientes sentimientos nacionalistas que han aflorado en Venezuela, como en casi todos los países latinoamericanos, durante el último lustro. Tendencias que han chocado con los intereses extranjeros presentes en el país, particularmente los petroleros, lo que ha entrañado un principio de conflicto con Estados Unidos, cuyas posibles manifestaciones violentas hasta ahora han logrado ser relativamente controladas por ambas partes. Del lado venezolano, seguramente deduciendo que de un conflicto directo y abierto con Estados Unidos el primer exportador de hidrocarburos latinoamericano tendría una posición muy vulnerable (40% de las exportaciones petroleras venezolanas son absorbidas por el mercado estadounidense), los dirigentes de la Patria de Bolívar han tratado de desviar las tendencias más radicales del nacionalismo al fortalecimiento de posiciones conjuntas bajo el esquema, bastante interesante (que data de los tiempos de la administración de Eduardo Frei en Chile y Carlos Lleras Restrepo en Colombia, en los años 1967-1968), de la creación de un "nacionalismo latinoamericano". No resulta raro constatar que Vene-

zuela se ha convertido también en un defensor intransigente del principio de la explotación de los recursos naturales por los propios países productores.

Desde luego en los párrafos anteriores no quedaron abarcados los problemas fundamentales de la política exterior venezolana entre los cuales habría que citar la idea que los venezolanos se hacen de la OEA, las relaciones con Colombia, el problema de Cuba, antes de abordar propiamente los resultados de la diplomacia personal de Caldera, así como los motivos particulares de acercamiento —en materia petrolera— con Ecuador y Argentina, para terminar con las relaciones con los Estados Unidos y la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo).

2. *Las críticas al funcionamiento de la OEA*

En cierta medida ha sido una sorpresa el grado de madurez con que los dirigentes venezolanos abordan el problema de la reestructuración de la OEA. Los dirigentes chilenos desde los inicios del régimen de la Unidad Popular plantearon la necesidad de una reforma general del sistema interamericano, a removerse “desde los propios principios” que lo sustentan, “terminando con la ficción de igualdad entre sus miembros”, como lo afirma el propio Salvador Allende, a fin de hacer desaparecer la posición hegemónica de uno solo de los miembros en detrimento de todos los demás.

Muy recientemente, a principios de marzo de este año, el representante chileno ante la OEA se refirió a los efectos de la reducción presupuestaria prevista para este año, sobre las cuotas de representación de personal dentro de la organización que corresponde otorgar a cada país, temiéndose una drástica reducción del personal de origen latino. Por otra parte, en la reunión del Consejo de Seguridad que tuvo lugar en este mismo mes en Panamá, los cancilleres de Perú y Panamá plantearon oficialmente la necesidad de que la sede de la OEA sea cambiada de la capital estadounidense a una capital latinoamericana, a fin de que la organización pueda hacer operables las eventuales reformas y realice sus actividades “sin restricciones”. Sin embargo, la posición más precisa y detallada que se conoce hasta ahora sobre la reestructuración del organismo interamericano es la del gobierno venezolano y sobrepasa con mucho las opiniones generales expresadas por diversos países, México y Colombia inclusive.

De acuerdo con los detalles publicados por el diario *El Nacional* de Caracas, en su edición del 21 de febrero pasado, la Cancillería venezolana, bajo el mando de Aristides Calvani, se propone llevar la lucha de las reformas de la organización a la Asamblea convocada por la propia OEA para el próximo mes de abril, con propuestas de modificaciones que abarcan, desde la filosofía de la organización, hasta los problemas presupuestarios y burocráticos. El ministro de Relaciones Calvani pondrá, a nombre de su país, sobre el tapete de las discusiones lo que considera serios derroches financieros. Por ejemplo,

1) preguntará al respecto de la utilidad de mantener siete “embajadores” que la organización tiene asignados en otros tantos países, de manera similar a cómo procede un Estado soberano; 2) también pedirá explicaciones sobre el hecho de que la Secretaría General disponga de medios financieros mayores o iguales que ciertos Estados miembros de la Organización; 3) sobre el hecho de que la Secretaría General auspicie proyectos o iniciativas a través de ciertos embajadores de países menores, que han sido funcionarios de la OEA o podrían pasar a serlo en el futuro. Venezuela propone que los embajadores que por diversas razones dejen esta categoría no pasen “automáticamente” a formar parte del plantel de funcionarios de la Organización sino que se disponga de un plazo razonable de, al menos, dos años para entrar a su servicio.

Fuera de estos aspectos de crítica de forma el plan venezolano comprende otros tres aspectos fundamentales: 1) reformas a la estructura del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CEPCIECC), proponiendo una distribución adecuada por países dentro de los mismos y presupuestos menos exagerados para cubrir sus necesidades burocráticas; 2) eliminación de la Comisión Coordinadora que existe entre los Consejos Permanente, Interamericano Económico y Social y la Comisión Ejecutiva del “CIECC”, por inútil e “incapaz de coordinar nada”, proponiendo trasladar sus funciones al Consejo Permanente; 3) el problema anotado como “reflexiones sobre el destino y misión de la OEA y la forma de realizarla en la coyuntura internacional del mundo actual”, tal como reza en los comunicados conjuntos firmados por el presidente Caldera con el coronel Hugo Bánzer de Bolivia y el general Emilio Garrastazú Médici del Brasil. Sobre este último punto se espera que el ministro Calvani tendrá reservado el grueso de las críticas teóricas y filosóficas, aunque es bien previsible que dentro del tema los venezolanos esperan también diversas intervenciones de varios países.

El 25 de marzo se especulaba en Washington sobre si las propuestas venezolanas no tenderán ya a formar un bloque latinoamericano dentro de la Organización que, eventualmente, redujera el papel de la presencia estadounidense al de “simple espectador”. Aunque es difícil especular firmemente sobre el particular la actual administración estadounidense podría aprovechar estas iniciativas radicales “en su contra” para justificar aún más su política de abandono progresivo del interés sobre la Organización, dejando que el Poder Legislativo estadounidense merme en mayor medida las partidas presupuestales anuales destinadas por el secretario norteamericano del Tesoro para las labores de la misma, y propugnando más severamente por la diplomacia bilateral contra la multilateral en la que los países pequeños no gozan del catalizador en su favor que les da el foro internacional.

No es la primera vez que los actuales dirigentes venezolanos se alzan contra este estado de cosas en la Organización. El presidente Caldera se refirió concretamente al problema durante su visita a Argentina, Bolivia y Perú. En la capital argentina expresó el deseo de que la Organización pudiese convertirse

en una especie de parlamento dentro del cual se trataran los asuntos hemisféricos, criticando severamente la existencia, dentro del organismo interamericano “más que (de) una mentalidad imperialista por parte de Estados Unidos”, de “una mentalidad colonialista por parte de algunos representantes latinoamericanos”. En La Paz, Caldera volvió sobre el asunto y al tiempo que afirmaba que muchas de las críticas hechas a la Organización eran justificables no obstante lo cual “la OEA tiene que existir”, aseguraba que, a su juicio, los problemas de la Organización más que de mecanismos eran de “actitud” reiterando sus críticas sobre la época en que muchos representantes latinoamericanos a la Organización iban sólo acompañados del propósito de “adivinar” previamente los deseos del representante estadounidense a fin de halagarlo y darle plena satisfacción. El comunicado conjunto firmado el 14 de febrero en Lima por Caldera y Velasco Alvarado dice lo siguiente al referirse al aspecto que nos interesa: (los presidentes) “Señalan su convicción de que es necesaria una pronta e íntegra reforma de los mecanismos del Sistema Interamericano, a fin de que cumplan a cabalidad su función como instrumentos de eficaz acción política, de acuerdo a la plural realidad del Continente, y de promoción del desarrollo de los pueblos americanos, teniendo en cuenta sus auténticos intereses y las necesidades socioeconómicas de la región.”

En las discusiones organizadas actualmente por la OEA para lograr la apertura de la misma a un número mayor de países americanos o europeos que, a la postre, coadyuven a moderar la presencia “física y financiera” estadounidense, el 7 de marzo pasado, Venezuela, Argentina y Guatemala se opusieron enérgicamente a la entrada de Gran Bretaña a la OEA como observador permanente, fundando su oposición en las reivindicaciones territoriales que los tres países sostienen contra el antiguo Imperio británico (islas Malvinas por parte de Argentina, Belice por parte de Guatemala y la región del Esequibo, hoy territorio de Guyana, que reclama Venezuela). Gonzalo García Bustillos embajador de Venezuela ante la Organización introdujo en el debate el problema del colonialismo, afirmando: “La Gran Bretaña todavía tiene colonias en este hemisferio y sería mal pasado que aceptemos la presencia de tal Estado entre nosotros.” Opinión que no compartieron ni el representante peruano ni el de Brasil alegando que resultaba contradictorio “aceptar la ayuda de un Estado y oponerse a su participación como observador”, agregando que “otros colonialistas habrán sido admitidos”, refiriéndose a Portugal.

3. Otros problemas latinoamericanos

3.1. Las relaciones con Cuba

Desde el ascenso al gobierno del régimen de la Unidad Popular en Chile, en noviembre de 1970, los Estados Unidos vieron resquebrajarse sus posibilidades de control unilateral del problema de Cuba, control que la potencia

estadounidense realizó hasta entonces con habilidad a través de la OEA. Ciertamente el régimen chileno precedente de Eduardo Frei Montalva había realizado sondeos sobre el asunto dentro de la propia Organización, pero sus sucesores no tuvieron empacho en invocar el caso mexicano y restablecer las relaciones con la Patria de Martí, haciendo grave denuncia de las resoluciones adoptadas en 1964 por la Organización como "injustas" y "desprovistas de base jurídica". Después vino la campaña peruana en favor del restablecimiento de relaciones que abarcó prácticamente todo 1971. Los sondeos realizados por Lima dieron por resultado que Argentina, Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia se inclinaban por una revisión del asunto, aunque sin salir de los marcos del sistema interamericano. No quedó más camino a los peruanos que seguir la vía establecida por los chilenos de restablecimiento unilateral de relaciones lo que llevaron a cabo en la primavera de 1972 desconociendo, a su vez, las resoluciones de la OEA. En este lapso se levantaron otras voces en favor de la revisión del asunto utilizando el faro de la Organización, como la del propio secretario general, Galo Plaza. A fines de 1972, Guyana, Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados decidieron, conjuntamente, establecer relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, decisión que les atrajo la ira de Washington con lo que menos pudieron salir de la "lista negra" de países "exentos de la ayuda estadounidense", en la que el Departamento de Estado los había puesto desde la histórica sesión de octubre de 1971 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió admitir a la República Popular China. El caso de los pequeños países del Caribe es interesante dada la cercanía de las antiguas colonias británicas con Venezuela, y el interés de los dirigentes de la Patria del Libertador de acercarse a ellas y borrar algunas diferencias.

Finalmente, toca el turno a Venezuela de ocuparse del asunto cubano. El ministro de Relaciones Exteriores Arístedes Calvani dejó en claro, en los últimos meses del año pasado, que Venezuela "no sería el primer país" latinoamericano que estableciera relaciones con Cuba pero "tampoco el último". El presidente Caldera fue más preciso en su mensaje de fin de año abogando por la unidad de todos los países latinoamericanos "sin excepción". Anteriormente (a fines de octubre de 1972) Caldera se había pronunciado por una reunión de jefes de Estados latinoamericanos "sin excluir a Cuba", en apoyo de una propuesta del economista chileno Felipe Herrera.

Para ese entonces (14 de diciembre de 1972) Salvador Allende había hecho escala en el aeropuerto venezolano de Maiquetía, a su regreso de la gira por Perú, México, Argel, Unión Soviética y Cuba. Algunos comentaristas supusieron que el dirigente chileno fue el portador de un mensaje personal del doctor Fidel Castro para Caldera. Tampoco debe menospreciarse el hecho de que Caracas restableció el servicio telefónico directo con La Habana desde mediados de 1972.

La reciente gira del mandatario venezolano estuvo salpicada de referencias al asunto cubano, y de labios de Caldera surgieron declaraciones de la mejor voluntad de su país para solucionar las diferencias. Por ejemplo, en la capital

ecuatoriana: (en los organismos internacionales) “Cuba ha ido incorporándose al grupo latinoamericano”. En La Paz, Caldera vaticinó una era de distensión en el Caribe al tiempo que aseguró que “en un tiempo no muy lejano” se normalizarán las relaciones con Cuba. En Lima Caldera declaró en una conferencia de prensa: “no hemos comprobado intervención alguna de Cuba en los intentos subversivos que se han dado últimamente en Venezuela”, agregando que su país había aprobado siempre la presencia de Cuba en los organismos iberoamericanos que existen dentro de las Naciones Unidas, dejando sentado: “el estado conflictivo y tenso que había con Venezuela ha cambiado mucho durante estos años de mi gobierno”. En el comunicado conjunto firmado el 19 de febrero entre Caldera y Velasco Alvarado se lee: “El presidente del Perú, recogiendo la invocación hecha por el presidente Caldera al inicio de su gira en pro de una real y efectiva solidaridad entre los países latinoamericanos, juzga que ha llegado el momento de reconsiderar la actitud de América frente a Cuba, a fin de terminar su prolongado aislamiento que no tiene necesidad de existir”. “El presidente de Venezuela ratifica la disposición de su gobierno en las actuales circunstancias de coyuntura internacional, para considerar, con el mejor espíritu, el planteamiento que formula el presidente del Perú.”

Aunque la posición de los actuales dirigentes venezolanos es en buena medida la opuesta a la de los dos predecesores regímenes de Acción Democrática —particularmente la del presidente Rómulo Betancourt quien fue uno de los más entusiastas promotores del aislamiento del régimen revolucionario cubano— se puede prever que la cautela de los actuales dirigentes de la Patria del Libertador en el asunto obedece más a la posición que pueda tomar la derecha interna y los partidos de oposición como Acción Democrática y el ejército, en un año de contienda electoral presidencial, que a la indisposición que puede mostrar Washington por una iniciativa unilateral venezolana.

3.2. Las relaciones con Colombia

Las relaciones entre Caracas y Bogotá han tenido algunas diferencias alrededor, primeramente, de los territorios al occidente del lago Maracaibo (litigio resuelto a fines del siglo pasado), y más recientemente sobre la posesión de las islas del pequeño archipiélago de El Monge, situado al norte de la desembocadura del citado lago. En los últimos tres años se han vuelto a suscitar declaraciones reivindicativas sobre dichas islas por parte de Colombia, fundadas, en parte, en el problema de la delimitación de las aguas marítimas y de la plataforma continental común a ambas naciones. Demandas que han acarreado alguna tensión e incidentes fronterizos entre fuerzas de los dos vecinos, lo que además ha indispuerto a la opinión pública de uno y otro país.

Como hechos paralelos que no contribuyen a descender el clima de las tensiones debe considerarse la decisión del gobierno colombiano de adquirir

recientemente cuatro docenas de aviones supersónicos, lo que dio pábulo a que las fuerzas armadas venezolanas presionaran a su vez al Estado venezolano para adquirir un total de 180 unidades supersónicas entre “Mirages” franceses y “Phantoms” norteamericanos, principalmente.

Sin embargo, parece que tanto venezolanos como colombianos han tomado conciencia de los graves riesgos que conlleva un envenamiento progresivo de sus mutuas relaciones. Prueba de ello son los múltiples pronunciamientos en favor de soluciones políticas negociadas, de parte de políticos de ambos países y altas personalidades de la cultura y el arte, así como la firma del Convenio Agropecuario entre ambos vecinos, el 28 de noviembre de 1972, en el que se prevén condiciones ventajosas para ambos países y por el que Colombia podrá realizar sustanciales exportaciones al mercado tradicionalmente deficitario de su vecino y la represión del contrabando. El embajador de Colombia en Caracas, Héctor Charoy Samper declaró que los resultados del convenio redundarán “benéficamente en el conjunto de nuestras relaciones” (*El Día*, noviembre 22, 1972). A este programa de buenas intenciones debe agregarse en sus aspectos más recientes el proyecto que contempla la construcción de un oleoducto entre ambos países que serviría para paliar el déficit de hidrocarburos que Colombia puede empezar a padecer pronto por el agotamiento de sus reservas.

Esta evolución hacia la normalización encontraba aun ciertas reticencias en el momento en que el presidente Caldera decidió iniciar su gira sudamericana precisamente tomando como primer punto la capital del vecino del Oeste. La escala en territorio colombiano no depasó de una hora, el 5 de febrero de 1973, y aunque la recepción de parte del presidente Misael Pastrana Borrero fue correcta, no fue excesivamente cordial. En su discurso de bienvenida, el presidente colombiano afirmó que “las pequeñas diferencias” en nada pueden cubrir de sombras la amistad entrañable de los dos países, agregando que la solución a los conflictos existentes quedará en el espíritu de equidad y derecho que preside las relaciones de los dos pueblos. Caldera, después de expresar similares sentimientos y poner de manifiesto la importancia de la “convivencia fronteriza”, cursó una invitación a su colega colombiano para que visitara oficialmente a su país en ocasión del sexquicentenario de la batalla naval de Maracaibo que se conmemorará este año. Pastrana Borrero agradeció sinceramente la invitación y ofreció considerarla favorablemente, “si las circunstancias lo permiten” (*El Día*, febrero 6 de 1973).

Al llegar a Lima, el 13 de febrero, durante la etapa de retorno, el presidente Caldera declaró en una primera conferencia de prensa que su país y Colombia alcanzarán una solución equitativa negociada en su diferendo sobre fronteras marítimas afirmando textualmente: “sobre el particular este planteamiento existente con Colombia no es, ni mucho menos, una cuestión que deba conducir a situaciones de tensión”, e hizo un llamado para que la frontera colombo-venezolana se convierta en una “fuente de cooperación y no en una mina de dificultades”.

3.3. Inquietud por el Brasil

Las tendencias hegemónicas y expansionistas manifestadas por los militares que gobiernan en Brasilia desde 1964, y la radicalización de sus posiciones expresadas en los últimos años han sembrado la intranquilidad en el sur del Continente. Al igual que los argentinos y chilenos, los venezolanos han ideado una política de contención dirigida a contrarrestar las poco gratas tendencias del coloso latinoamericano. En diversas ocasiones nos hemos referido a la declaración de Caldera del 10 de diciembre de 1971, protestando airadamente por el papel hegemónico que Washington aspiraba a darle a Brasil en el ámbito latinoamericano. Los periódicos brasileños y voceros del gobierno de Brasilia negaron entonces tales prácticas que se les atribuían, pero Venezuela volvió a la carga en el comunicado conjunto suscrito entre el general Lanusse y el presidente Caldera en marzo de 1972, en el que se anota el deseo de ambos países de luchar "contra todas las tendencias hegemónicas".

Después de los anteriores pronunciamientos comenzaron a manifestarse algunas otras preocupaciones venezolanas al llegar la carretera transamazónica brasileña de "Bona Vista" justamente a la frontera sudeste del país. Camino abierto, como varios otros, por los ingenieros militares del gigante latinoamericano en un tiempo brevísimo dentro de su programa de expansión hacia el interior. Los dirigentes venezolanos comprendieron de golpe que la selva no constituía un obstáculo más para separarlos de su inquietante vecino y que, por ello mismo, sería menester cambiar de estrategia. Atrás quedaban los tiempos de las relaciones cordiales dentro de la absoluta confianza como los simbolizados por el hecho de que, a principios de la década pasada, una comisión brasileña encargada de levantar los cálculos topográficos y fijar los límites y monumentos definitivos en zonas apartadas de la frontera del país, como era el caso de la selvática región del norte brasileño y sudeste de Venezuela, encontró que su país "debía" a la Patria del Libertador alrededor de 10,000 kms² de territorio que el río que sirve de límite internacional había dejado en territorio brasileño en sucesivos cambios de curso. El gobierno brasileño no tuvo inconveniente en restituir de *motu proprio* el citado territorio a Venezuela sin que mediara reclamación de ésta.

El cambio de política se imponía si Venezuela aspiraba seriamente a neutralizar los proyectos brasileños de hacer pasar la carretera de "Boa Vista" por territorio de Guyana hasta Georgetown, atravesando por mitad la región del Esequibo (250,000 kms²), territorio que Venezuela reclama a la antigua colonia británica. Los dirigentes venezolanos seguramente tampoco tardaron mucho en comprender que al debate con los brasileños deberían llegar acompañados de suficientes elementos disuasivos, algunos de los cuales el presidente Caldera se propuso reunirlos en la gira por Sudamérica.

En la nueva perspectiva, la gira del mandatario venezolano no podría hacerse bajo el argumento de la "contención brasileña" sin riesgo de volver intransigentes las posiciones del vecino. Por esto último, con habilidad, se

recurrió al camino indirecto lanzando una campaña en favor de la "solidaridad pluralista" latinoamericana, y haciendo de ella el centro de sus propósitos ante los gobiernos de los países visitados, a la vez que el eje de la entrevista con el presidente de Brasil el 20 de febrero, una semana después de su regreso a Caracas.

Obviamente Caldera hizo una serie de referencias directas al asunto brasileño durante su visita a los seis países sudamericanos. El 9 de febrero en Buenos Aires el presidente Caldera al tiempo que rechazaba el cargo de que su viaje obedecía al interés de formar una alianza de países hispanohablantes contra Brasil, reconoció la gran importancia de su vecino del sur, del que dijo "que es, con mucho, el mayor de los Estados latinoamericanos, por la circunstancia de que pudo mantener la unidad de todas las comunidades de lengua portuguesa en el Continente. Su importancia —añadió— no podemos desconocerla, pero desde luego sobre la base de una igualdad que, a mi entender, es fundamental en el espíritu latinoamericano".

"Ese sentimiento fiero de la igualdad, agregó, constituye una de nuestras características esenciales, y si no la reconociéramos, proclamáramos y corroboráramos, entendemos que cualquier intento de integración fracasaría."

Como se ha dicho, Caldera negó que se propusiera crear un "cerco" de países hispanohablantes alrededor de Brasil, tema sobre el que el periódico *Jornal do Brasil* hizo resaltar que, (el 19 de marzo la víspera de la reunión entre los presidentes Caldera y Garrastazú Médici), era motivo de preocupación entre ciertas fuentes del gobierno brasileño, para quienes la mejor manera de conjurar el peligro era justamente acercarse a Venezuela (*Panorama*, Buenos Aires, marzo 15 de 1973).

Los dirigentes brasileños, desde hace meses muestran un cierto interés por reducir los motivos de fricción con Caracas. En la visita del ministro brasileño del Plan Joao Paulo Dos Reis Veloso a la capital venezolana, en diciembre del año pasado, los brasileños expresaron su interés por establecer relaciones más estrechas entre sus respectivos países aduciendo como factor favorable el que tanto Brasil como Venezuela gocen actualmente de una tasa de expansión económica bastante notable y mantengan regímenes de apoyo a la economía privada; Reis Veloso fue mucho más explícito, dejando entrever la filosofía de su gobierno sobre la solicitud de ingreso venezolano al Pacto Andino y su papel en el sistema de alianzas latinoamericanas, advirtiendo que Caracas debía mejor asociarse con los países grandes (Argentina, Brasil y México) en lugar de hacerlo con los "pobres".

El 20 de febrero se inició la histórica entrevista entre el presidente Caldera y el general Garrastazú Médici en la mojonera BV-8 de la frontera entre ambos países. Pasando ambos a la población de Santa Elena de Vairén punto de unión de la nueva carretera brasileña de Boa Vista con el sistema de caminos venezolano, para intercambiar puntos de vista sobre diversos problemas inclusive comerciales que interesaban a ambos países, así como otros varios problemas del Continente.

Interesado como estaba el Brasil por la ampliación de sus relaciones económicas y técnicas, los dirigentes no encontraron inconveniente para firmar un comunicado con el presidente Caldera en el que expresaban su oposición a la creación de “zonas de influencia” en el mundo y “rechazan cualquier tendencia a la estratificación de la estructura mundial de poder”, al tiempo que subrayaban el derecho de todos los pueblos de “proteger y disponer libremente de sus recursos naturales” y reiteraban su adhesión al principio de que todo intento por impedir sus legítimos derechos es atentatorio a los principios de libre determinación y no intervención”. Por otra parte, ambos presidentes, sigue diciendo el comunicado, “respaldan todo esfuerzo tendiente a lograr una posición unificada de América Latina en lo que respecta a la defensa de sus derechos en la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Los dos mandatarios coinciden en la necesidad de enfatizar el papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, “incluyendo en este concepto la seguridad económica” entendiéndose por este último “la responsabilidad solidaria y colectiva de todas las naciones en lo que concierne al desarrollo”. La declaración conjunta certifica la intención brasileño-venezolana de fortalecer la ALALC e indica que debe reflexionarse acerca de la necesidad de fortalecer la OEA para que pueda alcanzar sus objetivos.

En los discursos de intercambio de condecoraciones el presidente Caldera abogó y urgió al Brasil porque los actuales sentimientos nacionalistas existentes en cada país latinoamericano, “en donde se expresan por igual los países grandes y pequeños” sean el medio de lograr un “nacionalismo fecundo” en América Latina, único nacionalismo “capaz de afirmar lo que nos una por encima de lo que nos divide”, enfatizó Caldera.

Si bien el discurso del mandatario venezolano estuvo lleno de citas y afirmaciones perfectamente claras, el discurso de su colega brasileño, por el contrario, quedó centrado en una retórica ambigua y vaga eludiendo deliberadamente los compromisos formales. De las palabras del mandatario venezolano se pueden retener algunas frases que dan mejor idea de la estrategia de los dirigentes de la Patria del Libertador: “creo firmemente que los pueblos latinoamericanos en esta hora precisa de la humanidad están llamados a construir por sí mismos la solidaridad pluralista capaz de concretar la unidad en la diversidad. Dentro de ese imperativo inaplazable, que nos estimula y nos apremia, el Brasil tiene que cumplir su papel”, remarcó el presidente Caldera.

3.4. Interés por los pueblos latinoamericanos de lengua inglesa y holandesa

El viaje de Caldera por América del Sur ha sacado a la luz el interés particular de su país por el destino de los pueblos de lengua inglesa y holandesa. Aludiendo concretamente a las antiguas colonias británicas de las

cercanías: Guyana, Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica las que, obtenida su independencia en años muy recientes han elaborado políticas nacionales e internacionales progresistas. Obviamente el reclamo venezolano abarca también a Surinam, Aruba y Curazao que aunque no cuentan todavía con el *status* de país independiente, al menos el primero goza ya de un cierto margen de autonomía.

La contigüidad de dichos países y territorios a las costas venezolanas es evidentemente un factor de peso para que la Patria del Libertador se preocupe por este tipo de relaciones y, entre otras razones, es esta misma proximidad (unos cuantos kilómetros en el caso de Trinidad y Tobago) la que impide que Venezuela se pronuncie en favor de las tesis latinoamericanas que propugnan por anchuras del mar territorial mayores de 12 millas.

Seguramente que esta misma contigüidad y algunas enemistades históricas han sido el origen de ciertas aprehensiones manifestadas en algunos de dichos países con respecto a las intenciones políticas y militares de la Patria de Bolívar. Así, el exministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago N. R. Robinson declaró en dos ocasiones que Venezuela se proponía intervenir militarmente en su país y en Guyana. En respuesta, pocos días después (23 de noviembre de 1972) el presidente Caldera respondió a tales acusaciones durante su habitual conferencia de prensa semanal, en el Palacio de Miraflores, indicando que la posición de Venezuela con respecto a los países del Caribe (de las cercanías) ha sido muy clara y respetuosa, afirmando concretamente: "Nunca los países del Caribe han visto la imagen de una Venezuela más dispuesta a la amistad y a la cooperación que en los años transcurridos en este período constitucional", atribuyendo el origen de pronunciamientos como el señalado a posibles "intereses políticos internos" de quien los emitía.

Redondeando su concepción de América Latina, Caldera en su conferencia de prensa concedida en Buenos Aires el 9 de febrero, indicó que a su modo de ver el concepto latinoamericano era "un poco estrecho", porque comprendía a todos los pueblos de habla castellana, portuguesa y francesa de la región, pero dejaba fuera a los de origen inglés y holandés, "que deben tener cabida en términos absolutamente equitativos y fraternos".

3.5. La entrada de Venezuela al Pacto Andino

Seguramente el aspecto crucial de la gira de Caldera por América del Sur fue la admisión de Venezuela como miembro de pleno derecho en el Tratado de Cartagena.

A mediados de la década pasada los dirigentes demócrata-cristianos chilenos encabezados por el entonces presidente Eduardo Frei Montalva y el grupo del presidente colombiano Carlos Lleras Restrepo se mostraban decepcionados por los magros resultados de la ALALC y la creciente tendencia de la misma a favorecer la posición ventajosa de los países más grandes, por lo

que aprovechando la presencia de otros regímenes civilistas como en Perú el de Fernando Belaúnde Terry y de Raúl Leoni en Venezuela se reunieron en Bogotá, en agosto de 1966, para suscribir la declaración que lleva el nombre de la capital colombiana. Declaración en la que expresan el deseo de sus países de realizar negociaciones para establecer mecanismos que permitan integrar las economías de los mismos, subentendiéndose, de manera más acorde con sus propios intereses.

La nueva posición de los países andinos no satisfizo a los intereses más duros de los entonces dirigentes militares brasileños y argentinos (Juan Carlos Onganía en Buenos Aires y general Da Costa e Silva en Brasilia) quienes miraron primeramente con antipatía los citados proyectos, y posteriormente les declararon su abierta hostilidad. Los países andinos debieron aclarar sus propósitos y granjearse la buena voluntad de los otros miembros de la ALALC, inclusive la de México, antes de presentarse a la Conferencia de Asunción, en octubre de 1967, donde el Consejo de Ministro de la ALALC declaró compatible el proyecto de integración andino con los objetivos de la Asociación de Libre Comercio, calificándolo de organismo subregional.

Durante este periodo, y hasta 1969, los representantes venezolanos participaron activamente en las discusiones para el establecimiento de instrumentos de integración especializados y perfeccionados, como la Corporación Andina de Fomento, creada bajo el modelo de la que funciona a escala nacional en Chile, fundada con un capital inicial de 50 millones de dólares, y cuya sede se acordó establecer en Caracas, en abril de 1969. Como ya indicamos al principio, poco después el gobierno del presidente Leoni anunciaba que su país se veía en la obligación de diferir su entrada al Acuerdo de Cartagena, no obstante la importancia de la corriente favorable al ingreso de Venezuela dentro del equipo gubernamental, pero que no había logrado triunfar sobre la eficaz campaña de los sectores privados encabezados por la poderosa Federación de Cámaras de Comercio (FEDECÁMARAS), la que temía ver desbordados sus intereses por una apertura más o menos indiscriminada de aranceles como se proponían realizar los estructuradores del nuevo ensayo de integración.

Manifestaciones oficiales venezolanas favorables al Pacto Andino nunca dejaron de expresarse, y es de suponerse una paciente labor de los actuales dirigentes a fin de convencer a los sectores opuestos a la adhesión del país, o para contrarrestar la influencia de los más intransigentes. De parte de los otros miembros del Acuerdo de Cartagena y de las propias autoridades del Pacto también hubo diversas iniciativas tendientes a estimular las posiciones venezolanas integracionistas, dada la importancia financiera y política que se concedía a la Patria del Libertador en el nuevo ensayo de integración, cuyos propósitos superaban con mucho el deseo de una mejoría en las relaciones económicas y sociales entre sus miembros y que preveían dotar de un peso político considerable al conjunto, capaz de contrarrestar los intereses

de los “tres grandes” latinoamericanos, creando un nuevo polo de atracción y de decisiones en el subcontinente.

De los llamados tres “grandes” del subcontinente, Argentina parece haber comprendido que un mejoramiento de sus relaciones económicas con el grupo, y eventualmente, su ingreso al mismo aun cuando no fuese como miembro de pleno derecho, pasa previamente por la adhesión de Venezuela al Pacto, país con quien desarrolla crecientes intercambios de artículos elaborados a cambio de hidrocarburos. De acuerdo con estos propósitos, en el comunicado conjunto firmado entre el presidente de Argentina general Alejandro Lanusse y el presidente Caldera en Caracas, en marzo de 1972, al final de la gira del mandatario argentino para reunir fuerzas destinadas a “contener” al Brasil, se puede leer el interés de ambos presidentes porque la Patria de Bolívar reinicie negociaciones a fin de solicitar su adhesión al Acuerdo de Cartagena. Otros países latinoamericanos como México no parecían exactamente convencidos de las ventajas de la adhesión de Venezuela al Pacto, prueba de ello son las declaraciones, no desmentidas, del agregado comercial de la Embajada de México en Colombia, Javier Silva Castañeda, quien afirmó el 8 de agosto de 1972, que el grupo subregional andino no debería variar en cuanto a los países que lo integraban, diciendo textualmente: “Argentina, Brasil y México son los países de mayor desarrollo dentro de América Latina. Cualquiera de ellos que entre al Grupo Andino minaría por completo el mercado subregional y desequilibraría así el comercio de la zona. No creo que convenga —añadió— a ninguno de los cinco países signatarios del Acuerdo de Cartagena la presencia, dentro del Grupo Andino, de Argentina, Brasil, y ni siquiera Venezuela. Este último país con su enorme reserva de dólares, se hallaría en circunstancias inmensamente más ventajosas frente a Colombia, Perú y Chile, y ni qué decir Bolivia y Ecuador.” Por otra parte, prosiguió, “Brasil no permitiría que se aceptara a Argentina dentro del campo de los cinco países andinos, sin que se les permitiera a ellos también. Igual será a la inversa. Y en tal caso, México pediría igual trato para sí “(*Excélsior*, agosto 9 de 1972). Declaraciones que revelaban seguramente la opinión de los que en México pensaban que el ingreso de Venezuela significaba perder el mercado de este país para ciertos productos manufacturados mexicanos y ciertos servicios, así como algunos beneficios políticos.

Las negociaciones para la adhesión de Venezuela se iniciaron a los pocos días de la visita de Lanusse a Caracas, entre representantes del gobierno venezolano y las autoridades comunitarias en la capital peruana sede del Pacto. Dichas discusiones se estancaron en más de una ocasión por dificultades diversas, inclusive problemas de fondo que incluían: 1) exigencia venezolana de obtención de concesiones tendientes a diferir la reducción arancelaria para ciertos productos que interesaban producir a la iniciativa privada venezolana; 2) modificación parcial del régimen sobre inversiones extranjeras privadas, la célebre “Resolución 24”, que permitiese reinvertir las utilidades de las empresas extranjeras en bonos y valores estatales, en proporciones y montos no

previstos por el régimen común, asunto que interesaba particularmente a Venezuela con su alto nivel de inversiones extranjeras directas, similar al de México.

El 6 de febrero se anunció en Lima el enésimo aplazamiento de las negociaciones a fin de reanudarlas después del paso del presidente Caldera por la capital peruana. Para esos momentos Caldera ya había iniciado su periplo, enfatizando el interés de su país por negociar un acuerdo favorable a todos los países miembros a fin de permitir el ingreso de Venezuela al Pacto Andino. Antes de que Caldera llegase a Lima, el doctor Salvador Allende, el general Alejandro Lanusse y el presidente de Bolivia, coronel Hugo Banzer Suárez se pronunciaron abiertamente por el ingreso de Venezuela al Acuerdo de Cartagena, ofreciendo especialmente el primero y el último mandatarios brindar todo su apoyo desde el interior del Pacto a fin de facilitar el arribo de Caracas. El entusiasta recibimiento tributado al presidente venezolano por el pueblo peruano y el gobierno del general Juan Velasco Alvarado ayudó a saldar los últimos escollos para el ingreso de Venezuela. En efecto, en la noche del 12 y la madrugada del 13 de febrero el presidente Caldera, el ministro de Relaciones Exteriores, A. Calvani y el embajador extraordinario de Venezuela, Julio Sosa Rodríguez discutieron con los representantes de los otros países miembros, las autoridades comunitarias y el presidente Velasco Alvarado los problemas de principios que impedían el entendimiento, prolongándose un poco más la discusión por algunas objeciones interpuestas por los representantes colombianos. En la mañana del 13 de febrero el acuerdo sobre las diferencias de fondo había sido logrado y el propio Caldera declaró que en las negociaciones que acababan de concluir se había procurado que no hubiera ningún país perjudicado, que Venezuela no aspiraba a ingresar con privilegios y que se había tratado de evitar que este país perdiera algunas conquistas ya logradas (*Excelsior*, febrero 14 de 1973).

El Protocolo de Adhesión fue designado como el "Consenso de Lima". En el discurso de la firma de Adhesión, Caldera expresó la esperanza de que el ingreso fuera bien acogido por el Congreso de su país (el Congreso está dominado por los partidos de oposición entre los que destaca Acción Democrática). Es necesario hacer resaltar otros párrafos del discurso de Caldera ilustrativos de su preocupación por calmar los intereses externos que inciden sobre el grupo subregional: "sabemos que los países del área andina, entre los cuales se encuentra ahora Venezuela, al unir sus esfuerzos no lo hacen para volver las espaldas a una región donde vive un conjunto de pueblos muy ligados y frente a los cuales tenemos una obligación que cumplir. Todos queremos el mayor y más fructífero intercambio con ese gran país que es Brasil, con ese gran país que es México y con esos queridos países que integran América Central".

En La Paz, voceros del gobierno boliviano declararon que se había dado un gran paso adelante en la integración del Continente. En Santiago, el canciller chileno Clodomiro Almeyda declaró en la misma tarde de la firma

del documento que “Chile recibe con la más íntima satisfacción el ingreso de Venezuela al Pacto Subregional Andino. En esta forma —agregó— ha culminado exitosamente un periodo de negociaciones que permite robustecer este grupo de naciones latinoamericanas”. En Lima los embajadores de Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina y Estados Unidos coincidieron al respecto de los beneficios que se esperaban del ingreso de Venezuela, al Pacto Andino. Nadie supone que exageraban, dado que el territorio, la población y los recursos con que cuenta el conjunto depasa fácilmente al de dos de los denominados “grandes” países de América Latina: Argentina y México. Ciertamente las dificultades de cada miembro del grupo son muy grandes y aún no se ve próximo el día de las grandes decisiones para la unificación política. Por lo pronto los 70 millones de habitantes han impresionado a todo el mundo y son la mejor esperanza en la lucha para el progreso unificado “libre de interferencias externas”, lo que viene a dar al traste con otras múltiples concepciones internacionales consideradas “tradicionales”. De acuerdo con el texto del “Consenso de Lima” la adhesión de Venezuela se verificará cuando este país haya depositado el instrumento de adhesión ante la Secretaría Ejecutiva de la ALALC y haya entrado en vigor el Protocolo adicional del Acuerdo de Cartagena. A su vez, para que este último sea efectivo se requiere que los cinco miembros originales del Protocolo comuniquen su aprobación a la Secretaría de la ALALC.

La ratificación del Protocolo por parte del Congreso de Venezuela parecía no tener problemas dado que tanto Acción Democrática, el partido mayoritario dentro del Legislativo venezolano, como los partidos minoritarios habían expresado su complacencia desde que se tuvo noticias de la conclusión de las negociaciones en Lima. Similar opinión tuvieron los empresarios de la FEDECÁMARAS, a diferencia de su actitud de hace cuatro años, y se preparan para reestructurar sus empresas a fin de hacerlas rentables y competitivas.

En Bogotá, Felipe Salazar Santos coordinador de la Junta de tres miembros del Acuerdo de Cartagena declaró que el ingreso de Venezuela obliga a un replanteamiento económico a nivel continental, pues ahora el grupo andino se ha reforzado como el instrumento de integración más importante de América Latina. Por otra parte, Raúl Arbeláez Ruiz, jefe de la delegación colombiana a las negociaciones en Lima, manifestó que la incorporación de Venezuela abría las posibilidades para la de otros países como Argentina y México, ya que han demostrado interés en ello, pero “en condiciones diferentes”, aludiendo seguramente a que será difícil su adhesión como miembros de pleno derecho.

De los criterios brasileños, aunque no existen muchas opiniones oficiales bien definidas, vale la pena recoger el del diario *Correio de Manha*, quien publicó un comentario editorial el 20 de febrero bajo el siguiente tenor: “Venezuela acaba de adherirse al Pacto Andino. La Argentina está por tomar idéntica actitud, cosa que no hizo hasta ahora porque dentro de tres semanas se realizarán allí las elecciones presidenciales. Y México, ciertamente, está espe-

rando su turno para integrarse, imponiendo, al igual que la Argentina, condiciones más privilegiadas, dada su importancia. Así, una curiosa cadena de intereses hispanoamericanos se va formando; una cadena que es, a su vez, un divorcio de los lazos tradicionales que dieron fuerza a la confraternidad panamericana y cuyas primeras críticas surgieron con los sueños expansionistas de Simón Bolívar y concluyen con los que, ostensiblemente, se pasó a llamar la abolición de las fronteras ideológicas (política ésta jubilosamente recibida por Salvador Allende, pues le sirve de sustento, y jubilosamente aplaudida por los hombres de La Habana)."

Después de suscrito el "Consenso de Lima" el presidente visitante y el anfitrión dieron a conocer un largo comunicado conjunto en el que se abordan una serie de problemas los más de ellos con amplia coincidencia de criterios entre los dos regímenes, coincidencias y planteamientos que superaban con mucho los comunicados firmados en Quito, Buenos Aires y La Paz (en Bogotá y Santiago la misión venezolana no estuvo más que una hora, y a Montevideo no pudo llegar debido al movimiento que los militares progresistas llevaban a cabo en ese momento contra el régimen de extrema derecha del presidente Juan María Bordaberry).

Dentro de los elementos novedosos del comunicado, cabría destacar la reiteración (que ya aparecía en los comunicados de Quito y La Paz) al respecto de la necesidad de aplicar a las relaciones entre los Estados los principios de la "justicia social internacional". Se amplía el concepto chileno de la "convivencia internacional dentro de la pluralidad ideológica", trasladándolo al de la "solidaridad pluralista". Se mencionan ampliamente y con precisión un gran número de problemas latinoamericanos y la lucha de la región por librarse del tutelaje externo, mencionando en particular la necesidad de presentar frentes comunes en el problema de los derechos sobre el mar territorial o mar patrimonial, la lucha contra la influencia negativa de las grandes corporaciones transnacionales, rechazo de las presiones ejercidas contra los países sede de inversiones extranjeras y condena de las presiones indirectas de algunos gobiernos utilizando los organismos de financiamiento internacionales, en especial los interamericanos. Se aborda el problema de Cuba en los términos señalados anteriormente. En fin como una concesión particular hacia los peruanos se condenan las pruebas atómicas atmosféricas en el Pacífico. Justamente al terminar el documento, Caldera expresa "su especial reconocimiento para con el presidente del Perú por su activa participación personal y la valiosa ayuda prestada para facilitar la incorporación de Venezuela al Acuerdo de Cartagena".

Pocos días después, el 12 de marzo, el presidente Caldera se refirió al asunto en el V y último Mensaje que rindió ante el Congreso, haciendo notar que tanto los países del área, como otros vecinos y aún algunos de fuera del hemisferio lo saludaron "como un hecho trascendental que vigoriza las perspectivas económicas de este conjunto de pueblos y constituye un nuevo y firme paso hacia la integración latinoamericana".

3.6. Otros objetivos del viaje

No se tendría una visión completa de los objetivos del viaje de Caldera si nos detuviéramos solamente en los propósitos de adhesión al Pacto, y el tratar los problemas de Brasil y Cuba. Como en toda visita de alto nivel, el mandatario venezolano se proponía también mejorar los términos de las negociaciones económicas con sus interlocutores como fue claramente el propósito con Argentina. En Buenos Aires el breve comunicado conjunto firmado el 8 de febrero habla en la mayor parte de sus considerandos de los asuntos económicos que interesan a ambos países, especialmente la venta de hidrocarburos por parte de Venezuela y la venta de maquinaria y equipo de explotación para dichos hidrocarburos fabricada en Argentina. En el caso del comunicado firmado con el presidente general Guillermo Rodríguez Lara se apoya el interés ecuatoriano al respecto de los derechos sobre el mar territorial, reiterando la facultad soberana de los Estados, particularmente de los que se hallan en proceso de desarrollo, para explorar, conservar, explotar y aprovechar o disponer de sus recursos naturales tanto renovables como no renovables, y reafirmar su adhesión al principio que indica que “todo intento por impedir u obstruir, directa o indirectamente ese legítimo derecho es atentatorio a los principios de libre determinación y de no intervención y podría llegar a constituir una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales”.

Desde luego el presidente venezolano ofreció su colaboración más amplia a Ecuador en materia de explotación petrolera, pues como se sabe las compañías internacionales que han obtenido concesiones tienen interés en convertir al pequeño país andino en el segundo gran exportador latinoamericano. Sin olvidar que la tendencia nacionalista del actual equipo militar que gobierna en Quito tiene interés en beneficiarse también de los precedentes venezolanos, enviando además un observador permanente a las reuniones de la OPEP.

Por otra parte, Caldera se declaró partidario del interés argentino por alcanzar el autoabastecimiento en materia de combustóleos. En La Paz apoyó sin reservas el derecho boliviano de obtener una salida al mar. Es decir, se comprometió sin evasivas en el sentido de las reivindicaciones más sensibles de cada uno de los pueblos visitados. En el caso chileno, vale la pena reproducir sus propias palabras que dan mejor idea de la simpatía del actual equipo dirigente venezolano por el ensayo de transformación que lleva a cabo el país del extremo sur de la comunidad latinoamericana. En su discurso de bienvenida en el aeropuerto de Prudahuel, Caldera expresó al presidente Salvador Allende: “la amistad de entre dos pueblos es indestructible y obliga a la defensa recíproca ante amenazas e influencias externas. Venezuela es solidaria con Chile, sin poner condiciones ni reservas ante la influencia que puedan tener aquellos que quisieran imponer su dominio, Venezuela está con Chile en la defensa de sus recursos naturales por encima de cualquier circunstancia”. Tanto Caldera como Allende enfatizaron la amistad de ambos países “por encima de las fronteras ideológicas” y Allende expresó que

dicha amistad se mantiene más estrecha que nunca pese a la diferencia de sus regímenes políticos. En una conferencia de prensa concedida a la prensa chilena, Caldera hizo destacar que Venezuela tiene el petróleo y Chile el cobre, abrigando la esperanza de que en un futuro próximo “los países exportadores de petróleo, cobre y otras materias importantes puedan acercarse para así afirmar su independencia económica”.

En fin, en Buenos Aires hizo notar que era el primer presidente venezolano que visitaba el país del Plata.

SEGUNDA PARTE

4. *Las relaciones con Estados Unidos*

Como ocurre en el caso de todos los países latinoamericanos, Venezuela no es una excepción para que el motivo de sus preocupaciones fundamentales externas sean las relaciones con Estados Unidos. También puede afirmarse que la clave de las relaciones venezolano-estadounidenses está dictada por el petróleo, de un lado, y del otro, el nacionalismo. Durante las décadas en que la primera variable prevaleció con amplitud, las relaciones se caracterizaban por la fidelidad venezolana hacia las posiciones estadounidenses, garantizada por la presencia de regímenes duros generalmente castrenses, secuelas de un viejo orden instaurado desde las luchas de independencia, que la antigua oligarquía criolla no tenía ningún interés en modificar. En cuanto apareció la variable del nacionalismo en territorio de la Patria del Libertador, con gran énfasis en la última década, las dificultades se perfilaron con la potencia estadounidense.

Desde la tercera década de este siglo las grandes corporaciones petroleras estadounidenses y anglo-holandesas empezaron a explotar los ricos yacimientos venezolanos, coincidiendo con su retirada a causa de los problemas que planteaban los regímenes nacionalistas de México. Desde ese momento y hasta principios de 1958 el “general petróleo” siguió los destinos de la vida política interna y externa de la nación, aplicando métodos para garantizar la “fidelidad externa” y el *statu quo*. Como era previsible la preeminencia del “general petróleo” encontró su antítesis en la madurez política que conduce tarde o temprano al nacionalismo.

Ciertamente los colosales imperios petroleros han aprendido la lección iniciada hace 35 años con México, proseguida por Irán, Egipto y los modernos países árabes sin olvidar el nacionalismo latinoamericano que reiniciaron los revolucionarios cubanos y han proseguido peruanos, bolivianos, chilenos, ecuatorianos, argentinos, venezolanos, retomado prácticamente por todos los demás países. En el caso de Venezuela los imperios económicos han descubierto con

sorpesa que el supuesto “resguardo” que les confería sus actitudes “flexibles” no sirve ya para convencer a sus interlocutores y contener sus reivindicaciones, sino presumiblemente son un estímulo más para proseguir la lucha hasta el fin del proceso reivindicativo, tal como lo planteara México en 1938.

En apoyo de las posiciones venezolanas juegan también una serie de factores presentes en el mundo de hoy: 1) el fin de una era de bipolaridad dando paso a una multipolaridad a “cinco”; 2) toma de conciencia de diversos países desarrollados y subdesarrollados para luchar conjuntamente en favor de sus intereses contra los colosales imperios económicos privados; 3) resquebrajamiento del frente de los petroleros internacionales por la aparición de competencia de parte de productores y consumidores socialistas y capitalistas; 4) tendencias nacionalistas actuales entre los principales países productores de hidrocarburos que imponen sus condiciones a través de eficaces instrumentos comunes; 5) crisis en la producción de energéticos que aparentemente sorprendió o escapó de las manos de los imperios tradicionales.

Nadie puede negar que Venezuela ha sido uno de los principales animadores de las nuevas tendencias. Evidentemente las relaciones con Washington no han salido mejoradas de este enfrentamiento. Por esa razón en los corredores de la capital estadounidense y de Wall Street se identifica comúnmente a Venezuela con los “países problemas” similares al Perú.

El primer signo de las nuevas tendencias que se perfilaban fue, sin duda alguna, el decreto expedido por el régimen provisional del contraalmirante Wolfgang Larrazábal en 1958, después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en el que se establecía la fórmula de reservar al Estado no menos del 50% de las utilidades totales obtenidas de la venta de hidrocarburos. Con posterioridad, la fórmula fue muy bien acogida por otros países productores, en particular los árabes.

Durante los regímenes encabezados por los líderes de Acción Democrática: Rómulo Betancourt y Raúl Leoni (febrero 1959 a junio 1969) se crearon mecanismos gubernamentales, como la Corporación Venezolana de Fomento y la Corporación Venezolana del Petróleo, tendientes a aumentar la participación del Estado en la vida económica nacional y a disminuir la preeminencia de las corporaciones internacionales. Se inició también un programa limitado de reforma agraria con el que se pretendía restar paulatinamente poder a las viejas oligarquías locales de donde surgían los caudillos y se turnaban los presidentes.

El triunfo electoral en 1965 del Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) cuyo principal líder e ideólogo es el actual presidente Rafael Caldera ha marcado las diferencias más serias con Washington. Nadie puede dudar que las tendencias nacionalistas eran parte de la vida venezolana —recuérdese sólo que los dos predecesores de Caldera habían sostenido tales tendencias en la clandestinidad hasta la década de los años 40. Sin embargo, los sentimientos nacionalistas se han recrudecido en la Patria del Libertador en el último lustro, al igual que en el resto de Latinoamérica, y el choque

con los intereses extranjeros dependía sólo de un problema de límites en que estaba inserta la madurez política, madurez que esencialmente depasó las condicionantes inferiores en el último decenio.

El régimen de Caldera ha debido canalizar las iniciativas nacionalistas populares y enfrentar, primeramente, el mal humor de Washington, y posteriormente, una parte del abanico de fórmulas "disuasivas" que el gobierno estadounidense tiene previsto para casos de "rebelión" como el presente. Sin embargo, hay suficientes indicios para creer que las precauciones de Washington depasan el caso de enfrentar la simple "rebelión". La importancia estratégica de la Patria del Libertador apenas puede discutirse. Es de suponerse que Washington está tan interesado como los dirigentes brasileños en que este país forme parte de la nueva cadena latinoamericana de "puntos de apoyo" que contrarreste los malos vientos provenientes de la vertiente que mira al Pacífico, que comprendería originalmente a Uruguay, Paraguay, Bolivia y, desde luego, Brasil (es decir, el sector sustancial de la zona atlántica). Sin embargo, la realidad debe tener nuevamente embrollados a los fabricantes de esquemas de la Casa Blanca dado que el pequeño Uruguay se ha escapado del área de regímenes "duros" justamente por su movimiento encabezado por los militares encargados de mantenerlo dentro del equipo de países "aceptables", tomando el control de la escena política precisamente cuando Rafael Caldera debía realizar su programada visita oficial. Con respecto a Venezuela nadie pondría en duda que se ha elegido el peor momento para invitarla a formar parte de la alianza contrarrevolucionaria.

La política nacionalista, que inquieta particularmente a los medios oficiales y privados norteamericanos, se encuentra mejor expresada en algunos hechos. El 12 de febrero de 1970 el presidente Caldera firmó la ley, aprobada previamente por el Congreso, que permitía elevar la participación del Estado dentro de las utilidades derivadas de los hidrocarburos, pasando de un porcentaje del 52% del total, al 60%. Las nuevas disposiciones permiten también al gobierno establecer unilateralmente los precios de referencia de los hidrocarburos, con el propósito de que los aumentos en los precios mundiales de los hidrocarburos se reflejan fielmente en los haberes del fisco venezolano. Esta última facultad es la que ha utilizado el Estado venezolano el pasado 17 de marzo al anunciar que aumentaba en un 8% los precios de los hidrocarburos como consecuencia de la última caída del dólar.

A fines de 1970 comenzó a ganar cuerpo la propuesta de un proyecto de ley que permitía recuperar para la nación los bienes e intereses de las empresas petroleras operando en Venezuela aun antes de que vencieran los actuales contratos de concesión, renovados por el régimen de Marcos Pérez Jiménez en 1952, y vigentes hasta 1953 y 1954. La Ley de "Reversión" fue aprobada por el Congreso y firmada por Caldera a fines de julio de 1971, y prevee la posibilidad de no otorgar compensaciones a las empresas afectadas.

El 13 de febrero de 1972 el presidente Caldera anunció que su país denunciaba el Tratado de Comercio que lo ligaba a Estados Unidos desde

1939, cuyo espíritu estaba fundado en la vigencia de la “cláusula de la nación más favorecida”, lo que beneficiaba solamente a los Estados Unidos en opinión de los venezolanos, al poner en igualdad de circunstancias la colosal economía estadounidense con la de su país sin ninguna posibilidad de hacer efectiva la “reciprocidad”. Los venezolanos reprocharon también al Tratado el erigirse en un escollo grave para la industrialización del país e impedir que se dotara de barreras aduaneras eficaces para llevar a cabo ciertos procesos manufactureros.

Venezuela y Estados Unidos discuten actualmente la firma de un nuevo Tratado de Comercio. La posición venezolana se limita a obtener un trato preferencial para sus hidrocarburos en el mercado estadounidense, a lo que anteponen los norteamericanos la aceptación de nueva cuenta de la “cláusula de reciprocidad”.

El régimen socialdemócrata venezolano ha dado muestras de ser suficientemente realista y no pierde de vista que su país depende en 50% de sus importaciones del mercado estadounidense, que el 40% de la exportación de hidrocarburos van destinados a Estados Unidos y que en materia de importación de técnicas, equipo y materias primas la dependencia con respecto a las fuentes estadounidenses es mayor aún. El régimen venezolano se ve en la necesidad de equilibrar la presión nacionalista derivada del hecho de que el 72% del petróleo, el 99% de la minería, el 68% de las industrias y el 72% de las instituciones financieras del país están en manos del capital norteamericano, que reportó a la “gran democracia del Norte” 5,400 millones de dólares en el período 1960-69, sin contar los cuellos de botella externos señalados anteriormente.

El 6 de agosto de 1972 el secretario de Estado William Rogers declaró que Venezuela podría dejar de ser proveedor de hidrocarburos de los Estados Unidos, debido a los aumentos de precios unilaterales decretados entonces por el gobierno del país sudamericano y las medidas reivindicativas anunciadas por el presidente Caldera. El entonces embajador de Caracas en Washington, Julio Sosa Rodríguez, fue comisionado para apaciguar los temores estadounidenses.

Continuando la política norteamericana de “sondear” los ánimos nacionalistas latinoamericanas, el embajador estadounidense en Caracas, Robert McClintock, declaró, el 30 de noviembre de 1972, en un discurso pronunciado ante la Cámara Norteamericana de Comercio de la Ciudad de Valencia que: “La inversión extranjera en Venezuela depende ahora de que se aclaren las reglas del juego” (como se recordará a mediados de octubre de 1972 el embajador de Estados Unidos en México, Roberto McBride demostró oficialmente su preocupación por el posible cambio en “las reglas del juego” del gobierno mexicano hacia las inversiones extranjeras).

McClintok no olvidó recordar en Valencia que el monto de los capitales privados norteamericanos en Venezuela era de 3,000 millones de dólares, de los cuales un tercio lo ocupa el sector petrolero.

El 12 de febrero se dio a la publicidad en Washington un estudio sobre la situación petrolera mundial en el que se hace notar que las compañías que operan en Venezuela tendrán que entregar sus concesiones antes de que se inicie el proceso de reversión natural a partir de 1983. En este caso las compañías podrían seguir operando algún tiempo a base de contratos de explotación, lo que podría ocurrir hasta fines de la presente década.

Desde noviembre de 1972 una aguda escasez de combustóleos se ha abatido sobre el mercado estadounidense, agravada por un brusco aumento en la demanda, esta última a su vez estimulada por un invierno riguroso. Ante este problema los empresarios y autoridades estadounidenses han demostrado preocupación y cierta angustia, planteándose de golpe al problema de la explotación de los yacimientos latinoamericanos. Los trabajos de las empresas petroleras en Ecuador han dado buenos resultados y el país empezó el año pasando a exportar crecientes cantidades de crudo. De los yacimientos del Amazonas peruano las empresas esperan pronto extraer grandes cantidades aguardando sólo se tenga listo el oleoducto del Pacífico. En Bolivia el régimen del coronel Hugo Bánzer anunció, a principios de marzo, que había concedido a la Unión Oil una extensión de un millón de hectáreas a cambio de regalías, porque realice explotaciones durante 30 años en una zona situada al sureste del Beni. El director de la oficina norteamericana de Planificación para Situaciones de Emergencia, Dorrel Trent declaró que Estados Unidos está listo para "unirse a Venezuela" en los trabajos de prospección, perforación y explotación de los yacimientos de crudos pesados de la Cuenca del Orinoco que se estiman en 700,000 millones de barriles. Los Estados Unidos enviaron emisarios ante el gobierno venezolano para llegar a acuerdos y coordinar la explotación de los citados yacimientos, pero las negociaciones están en punto muerto desde enero de este año debido a la difícil conciliación de la posición estadounidense de exigencia de una amplia garantía para las operaciones de sus empresas y la firme posición de los venezolanos de obtener, a su vez, seguridades de ampliación del mercado norteamericano para los crudos venezolanos.

El 6 de marzo, oficialmente los Estados Unidos propusieron, a través de un especialista del Departamento de Estado, que los principales países consumidores de petróleo crudo formaran una asociación a fin de contrarrestar la creciente influencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El mismo experto aclaró que aun desarrollando otras fuentes de energía los Estados Unidos dependerán en 50% de su consumo de combustóleos importados durante los próximos 15 años. La idea de formar una asociación de países consumidores no es nueva, fue lanzada originalmente por el gobierno español a raíz del primer forcejeo de la OPEP con las compañías petroleras, a fines de 1971, y mejorada por John D. Connally en una exposición ante una subcomisión del Congreso estadounidense en abril de 1972 (poco antes de abandonar la Secretaría del Tesoro), proponiendo agregarle la función de salvaguarda de las inversiones de los países consumidores situados en los países productores.

El 17 de marzo pasado los países de la OPEP se reunieron en Viena para unificar su posición en torno a los efectos de la devaluación del dólar. Durante la reunión el ministro argelino de Hidrocarburos, Balaid Abdesselam dejó perfectamente establecido en una declaración cuál era el espíritu que prevaleció en la conferencia: "la era de las negociaciones con las compañías toca a su fin, y en el futuro los países productores acordarán entre ellos para fijar los precios; las compañías serán simplemente consultadas, pero no tendrán voz en las decisiones". Los representantes de la delegación venezolana declararon, a su vez, que "en materia de Petróleo, Venezuela dicta leyes, no las negocia". Más explícito fue el ministro de Petróleo de Arabia Saudita al señalar, unos días antes, en respuesta a la propuesta norteamericana: "en caso de que se creara este frente de los países consumidores, las naciones productoras responderán disminuyendo su producción".

Después de dos días de deliberaciones, la reunión de la OPEP en la capital austriaca resolvió: 1) exigir que los países industriales derriben sus barreras arancelarias para abrir sus mercados a los productos de las naciones petroleras; 2) creación de un banco que financie los programas económicos de los Estados miembros; 3) vincular la explotación de los hidrocarburos con los programas nacionales de desarrollo integral; 4) realizar una reunión en Beirut, el 22 de marzo, para discutir una alza de los precios del petróleo, a fin de reajustar los precios a la devaluación del dólar y a la reevaluación del marco alemán y otras divisas.

Hugo Pérez la Silva, ministro venezolano de Minas e Hidrocarburos declaró en la capital austriaca que las reservas petrolíferas mundiales se agotarán en 38 años al actual ritmo de explotación, haciendo notar que si bien la conferencia se había convocado para discutir el problema de la escasez de petróleo pronto había derivado al de la necesidad de obtener "precios justos" para el carburante. También hizo saber que su país apoyaría el ingreso de Ecuador a la OPEP, agregando que estaba de acuerdo con la idea de constituir un banco financiado por los 11 miembros de la Organización a fin de evitar que los recursos aportados por los países miembros sean manejados por bancos de los países industrializados. Por otra parte, dejó sentado que el petróleo como instrumento de negociación política podría servir incluso para lograr que los productos elaborados y semielaborados del Tercer Mundo conquistasen los mercados de los países industrializados.

A guisa de información, el primer ministro de Irán, Amir Abass Hoveida declaró en Teherán que a partir del 20 de marzo Irán se haría cargo del "control total" de todas las instalaciones de la Western Oil Consortium, y que pasarían a su control la dirección y explotación de yacimientos, producción de crudos y refinados y la exportación de los carburantes. "Las empresas petroleras pasarían a ser clientes del estado iraní", añadió Hoveida.

El primer ministro hizo saber que de acuerdo con un convenio firmado con el consorcio, éste permitirá que sus técnicos trabajen para Irán, y pagará al Estado un precio "justo" por el petróleo. El acuerdo tendrá una

vigencia de 20 años y participan las compañías petroleras británicas, norteamericanas, francesas y holandesas que forman el consorcio.

El 20 de marzo la propuesta norteamericana dirigida a los europeos y al Japón para llegar a un entendimiento encaminado a frenar las tendencias de los países productores, subió de nivel en Washington. Ese día James Akins, principal consejero del presidente Nixon para asuntos de combustibles y energía, fue el encargado de renovarla, esta vez en un artículo publicado en el número de abril de *Foreign Affairs*.

Otros aspectos de la posición venezolana frente a Estados Unidos es el papel que la Patria de Bolívar juega en otras reuniones internacionales, conjuntamente con el bloque latinoamericano, tal como en la reunión del Consejo de Seguridad realizada en Panamá, la reunión de los "20" en Washington a propósito de la reforma monetaria internacional y la celebración del XXV aniversario de la creación de la CEPAL en Quito, todas estas actividades realizadas en el mes de marzo de 1973, en las que el tono de las delegaciones venezolanas fluctuaron desde la moderación hasta los principios de radicalización.

Conclusión

1. La política exterior venezolana en la actualidad se encuentra encasillada en límites relativamente estrechos, en los que siempre aparece como gran constante de la ecuación la extracción petrolera por las empresas extranjeras.

2. Una variable aparece, en la vida interna y desde hace una década, con amplias repercusiones en la posición externa: el nacionalismo. El régimen del partido COPEI, presidido por el actual presidente Rafael Caldera, ha debido canalizar el nacionalismo proponiéndose la recuperación total de los bienes y derechos de las empresas petroleras extranjeras aun antes de que terminen las actuales concesiones en 1983-1984.

3. Aunque Venezuela visiblemente trata de evitar un deterioro progresivo de sus relaciones con Washington quisiera obtener el máximo de concesiones luchando a través de la presión de la OPEP y la adopción de posiciones comunes con los países latinoamericanos, a diferencia de otros países del subcontinente como Chile y Perú que buscan diversificar al máximo su comercio y contactos económicos fuera del hemisferio occidental, aunque reservando a la América Latina un papel esencial en la lucha común frente a la potencia estadounidense.

4. No debe entonces extrañar que Venezuela se convierta en un partidario acérrimo de las posiciones latinoamericanas más radicales. Para lograr sus fines en el subcontinente parecía lógico que Venezuela se inclinase por obtener ventajas dentro del grupo de países denominado andino. Su insistencia para ingresar al Pacto de Cartagena puso en claro dos tendencias latinoamericanas: a) la del apoyo entusiasta para el ingreso, de la que participaban los propios

países andinos y la Argentina y, *b*) la de desacuerdo, como la mexicana y la de Brasil. Desacuerdo de México, al menos, hasta el año pasado.

5. El llevar a la práctica su política de acercamiento latinoamericano ha significado desconocer antiguas posiciones oficiales venezolanas como en el caso del apoyo a la vieja estructura de la OEA, las relaciones con Cuba e incluso las relaciones con cualquier tipo de régimen no importando su ideología u origen.

6. Presumiblemente a los ojos de Washington el radicalismo venezolano tiene límites en el subcontinente que considera serán difíciles de franquear por la Patria del Libertador. Sin embargo nadie puede predecir exactamente qué puede ocurrir frente al entusiasmo de los pueblos del subcontinente cuando hablan del “nacionalismo latinoamericano”, precisamente para anteponerlo a los intereses estadounidenses, unos de cuyos principales voceros son los dirigentes venezolanos. Sentimiento nacionalista continental que se nutre de muchas fuentes y que Washington acicatea constantemente con sus actitudes despectivas e indiferentes hacia sus vecinos del Sur, así como con sus métodos coercitivos o “disuasivos” para contenerlo.